

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece don Gonzalo Aguirre Toro, abogado, en representación de las sociedades **S.Q.M. Salar S.A., S.Q.M. Potasio S.A., y Sociedad Química y Minera de Chile S.A.**, en su calidad de terceros interesados e interpone reclamo de ilegalidad de conformidad con el artículo 28 la Ley N° 20.285, **respecto de la decisión de amparo C4529-2021, dictada por el Consejo para la Transparencia.**

I.- Antecedentes

Relata que la sociedad “Albermale Limitada” requirió a la Corporación de Fomento para la Producción (en adelante “CORFO”) –en lo que subsiste-, la entrega de los borradores de contratos, intercambiados entre CORFO y las reclamantes, con ocasión de las modificaciones a los contratos “*Proyecto en el Salar de Atacama*” y “*Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA*” de fecha 17 de enero de 2018 y 08 de enero de 2020, respectivamente. CORFO se negó a la entrega, aduciendo que se trataba de información que podría afectar los derechos de las sociedades reclamantes. Por su lado, ellas mismas se opusieron a las solicitudes, argumentando que la información requerida no es de carácter de público y porque contiene información comercial sensible y reservada, amparada en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia (LDT).

En lo que interesa, en sesión ordinaria N° 1246, de 18 de enero de 2022, el Consejo para la Transparencia CPLT) **acordó acoger parcialmente** el recurso de amparo deducido por “Albermale Limitada” y **ordenó la entrega de los borradores de contratos antes referidos.**

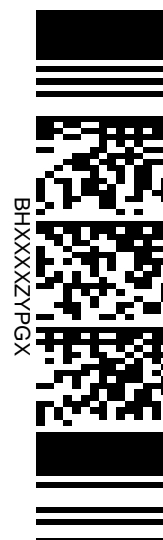
II.- Las ilegalidades de la decisión del CPLT

En concepto de las sociedades reclamantes, la decisión que impugna por este medio incurre en dos grupos de errores o ilegalidades:

- 1.- Porque se confiere el carácter de públicos a documentos que la Carta Fundamental no califica como tales; y
- 2.- Porque se desestima la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de LDT.

Las impugnaciones precitadas pasan a reseñarse en los párrafos que siguen.

1.- Los documentos no son públicos



El artículo 8° inciso segundo de la Constitución dispone: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

Del texto transcrito la reclamante resalta que el derecho de acceso a la información está acotado a *“los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen...”*, lo que refrenda el enunciado siguiente al prescribirse allí que una ley determinada puede establecer *“la reserva o secreto de aquéllos o éstos”*, es decir, de los actos y resoluciones, por un lado, y sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, por el otro. El inciso primero del artículo 5° de la LDT se ajusta a la norma fundamental y reafirma lo dispuesto en ella, estableciendo que: *“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quorum calificado”*.

No obstante, el inciso segundo de ese mismo artículo 5° amplía las hipótesis de publicidad, prácticamente a cualquier instrumento o información en poder de los órganos de la administración, señalando: *“Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*.

Los borradores de contrato no corresponden a un acto, resolución, fundamento de acto o resolución, o a un procedimiento seguido por la administración y pertenecen al grupo o categoría del citado artículo 5° inciso 2°. Así, advierte una *“severa divergencia entre la regla Constitucional y la regla legal”* porque mientras la CPR limita el ámbito de publicidad a los *“actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen...”*, adoptadas por la Administración (salvo las



excepciones legales), la norma de rango legal (el art.5.2), contraviene el texto constitucional y califica como pública “la información” que obre en poder de los órganos de la administración. Esta tensión ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por el Excmo. Tribunal Constitucional, declarando “inaplicable por inconstitucional” el inciso segundo del artículo 5 de la Ley N° 20.285, explicando el verdadero sentido y alcance del artículo 8 de la carta fundamental. A ese respecto, cita extensamente ciertos fundamentos de sentencias pronunciadas en la materia por dicho tribunal, siendo del caso transcribir lo expresado en el motivo 21° de uno de esos fallos, en cuanto allí se expresa lo que sigue:

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de lo señalado anteriormente fluye nítidamente que el precepto impugnado amplía el objeto del acceso a la información vía Ley de Transparencia, “porque lo separa completamente de si se trata de actos, resoluciones, fundamentos de éstos, o documentos que consten en un procedimiento administrativo, como es aludido por la Constitución. Así, resulta difícil imaginarse una información que no esté comprendida en alguna de las dos categorías que el precepto establece, porque la Administración o produce información o la posee por algún título. El punto es que toda ella sería pública, independientemente de si tiene o no relación con el comportamiento o las funciones del órgano de la administración (STC Rol N° 2907, c. 35).”;

Conforme a ello, tomando en cuenta el bloque normativo aplicable, los principios de juricidad y legalidad y conforme a la tipología taxativa establecida por la norma constitucional (8.2) y su consagración legal (5.1), debió concluirse que: i) Los borradores de contratos requeridos por “Albemarle Limitada” no son actos administrativos terminales (no así los contratos finales celebrados entre las partes, que sí son públicos y se encuentran a disposición del requirente); y ii) Tampoco son actos o resoluciones que sirvan de fundamento a una decisión, en tanto no reflejan la voluntad definitiva del Estado en la contratación.

2.- Se configura la causa de reserva invocada

Para el caso de estimarse que son públicos los borradores de contratos, las reclamantes consideran que debe acogerse igualmente su impugnación por concurrir la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la LDT.



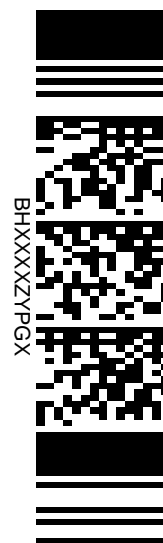
Enfatiza que el requirente de información es el principal competidor de las Sociedades en el mercado de minerales no metálicos concesibles, opera en el mismo sector y actualmente enfrenta un litigio con CORFO respecto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el Salar de Atacama, hecho que constituye su principal -y real- motivación para requerir información confidencial de las Sociedades.

Explica seguidamente que en la propia decisión de amparo el CPLT deja consignado que se trata de información secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información y que ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto.

En cuanto a la exigencia de que tenga un valor comercial por ser secreta, esto es, que proporcione a su titular una ventaja competitiva (y que por el contrario su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo), explica lo que sigue.

Los borradores de contratos fueron intercambiados entre CORFO y las Sociedades en el marco de un proceso de negociación que buscó terminar en sede de conciliación una serie de juicios arbitrales seguidos por los contratantes entre los años 2014 y 2016 ante el CAM Santiago. Esos procesos judiciales tuvieron su origen en la divergencia de los criterios o interpretaciones empleados por CORFO y las Sociedades en la determinación de la renta de arrendamiento que esta parte debía pagar a CORFO por concepto de los contratos de arrendamiento de pertenencias mineras actualmente vigentes.

La conciliación judicial requería que las Sociedades entregaran a CORFO información comercialmente sensible y confidencial sobre sus procesos extractivos, volumen de ventas de Litio y Potasio que las Sociedades llevaron a cabo entre los años 1997 y 2016, los precios de dichas operaciones, las producciones de Litio acumuladas para el período 1997-2016, precios de venta, información sobre el pago de rentas anuales efectuadas por los Arrendatarios, así como una serie de antecedentes estratégicos y comercialmente cuya divulgación podría permitir que los competidores se adapten a las condiciones y precios ofrecidos por las Sociedades. Todos esos antecedentes se encuentran contenidos, referenciados o citados en los borradores de contratos intercambiados en el



proceso de negociación de los instrumentos denominados modificaciones a los contratos "Proyecto en el Salar de Atacama" y "Arrendamiento sobre pertenencias mineras OMA", de fechas 17 de enero de 2018 y 8 de enero de 2020.

Añade que la información contenida en los borradores de contratos otorgará una clara ventaja comparativa a quien conozca de ellos, permitiendo al solicitante tomar conocimiento de información confidencial entregada en un proceso de conciliación judicial.

Los borradores solicitados contienen información sobre las producciones anuales de las Sociedades y precios de dichas transacciones (criterio determinante en la competencia que caracteriza estos mercados), lo cual influye en la determinación de la renta final a pagar al Estado.

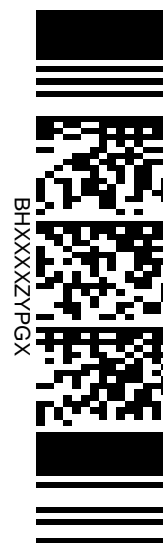
Remarcan que los borradores de contratos solicitados se ventilan únicamente en un proceso judicial de carácter reservado y que todo el proceso de negociación se encontró sujeto a la supervigilancia y aprobación del Consejo de Defensa del Estado. Toda la información que dio origen a los borradores de contratos fue contractualmente calificada como reservada y comercialmente sensible por CORFO, adoptando este último el deber de confidencialidad respecto de esta última.

Se apersonó la peticionaria “Albemarle Limitada”, en calidad de tercero interesado, pidiendo el rechazo del reclamo de ilegalidad, con costas.

Tras exponer brevemente los antecedentes del proceso administrativo, sostuvo que la decisión impugnada se ajusta a derecho.

En concreto, afirma que los borradores de contrato constituyen información pública de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5 y 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia, lo que se presume en la medida que se encuentran en poder de entes de la Administración, independientemente de su carácter terminal o de su formato.

La ley no establece excepción alguna para proteger la confidencialidad de actos que no sean “*terminales*”; de manera que por aplicación de los principios de “libertad de información” y de “apertura o transparencia”, los borradores de contrato en cuestión son constitutivos de información pública. Además, la Constitución establece expresamente la publicidad no sólo de los actos “terminales”, sino también de los fundamentos o procedimientos de los



actos o resoluciones que por su propia naturaleza son cuestiones previas a la decisión misma.

Por otro lado, arguye que no se verifican los presupuestos copulativos del artículo 21 de la Ley de Transparencia para calificar la información como reservada. Postula que los borradores de contrato en cuestión no son secretos. En todo caso, la divulgación de los borradores de contratos no causa ningún perjuicio jurídicamente relevante a SQM.

Como fuere, apunta que SQM no acreditó que la entrega de dichos borradores le causara una afectación en sus derechos comerciales, siendo, por tanto, improcedente aplicar la causal de reserva de la información establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

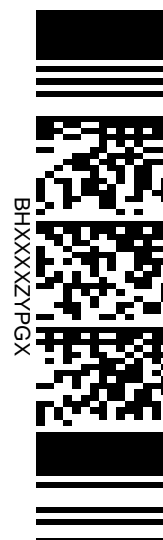
Evacua su informe el Director General del Consejo para la Transparencia, solicitando que este reclamo sea rechazado.

Luego de reseñar los antecedentes del reclamo, postula que el Consejo que representa no incurrió en ninguna ilegalidad en la decisión de amparo rol C-4529-2021 y que las reclamantes pretenden restringir injustificadamente la aplicación y alcance de las normas constitucionales y legales.

Sostiene que desde la entrada en vigencia del nuevo artículo 8° de la Constitución se estableció el piso de aquellos antecedentes que son considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del “derecho de acceso a la información pública”, ámbito de publicidad que ratificó y desarrolló el legislador al aprobar los artículos 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia, teniendo como única forma de afectación la existencia de una ley de quórum calificado que establezca el secreto o reserva por las causales que se establecen al efecto.

Concluye que atendido lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, artículos 5°, 10, y 11 letras a) y c) de la Ley de Transparencia, la información objeto del amparo detenta una naturaleza eminentemente pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por constituir una excepción al principio general de publicidad, deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva y, desde luego, la causal debe ser acreditada fehacientemente por quien las invoca, lo cual no ocurrió en el caso de autos.

Respecto del segundo punto o capítulo del reclamo, refiere no es admisible que prime el secreto establecido, puesto que ello infringe el



principio de jerarquía normativa y de la fuerza obligatoria de la Constitución, ya que un contrato no puede estar sobre lo dispuesto en la ley, ni mucho menos, en la Carta Fundamental que expresamente se dispone que la reserva o secreto debe ser establecida en virtud de ley de quórum calificado.

Refiere que la publicidad de la información solicitada no afecta los derechos comerciales y económicos de las sociedades SQM, de modo que no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, señala que al esgrimir SQM sólo alegaciones genéricas, sin especificar y acreditar los perjuicios de entregar la información en comento, invocando además, sólo riesgos remotos, carentes de prueba, resulta que no es plausible concluir que se genere afectación de sus derechos comerciales o económicos, máxime cuando, aplicando el principio de divisibilidad, el Consejo ordenó tarjar en forma previa a la entrega toda la información referente a antecedentes comerciales de las empresas Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM Potasio S.A. y SQM Salar S.A., tales como, producciones anuales de las Sociedades, venta y precios de dichas transacciones.

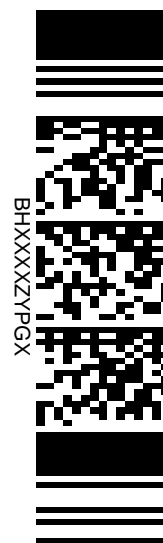
De otro lado, señala que SQM carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad alegando una afectación a CORFO, cuya invocación solo corresponde al órgano de la administración. No es procedente que, en su calidad de tercero involucrado, SQM pueda invocar la hipótesis de secreto, puesto que el único habilitado para hacerlo es el órgano directamente requerido, ya que los motivos se relacionan con el debido cumplimiento de sus propias funciones y la ponderación de su afectación con ocasión de la publicidad de la información pedida.

A mayor abundamiento, expresa que existe un interés público en transparentar todo el iter decisonal de los acuerdos adoptados por la Administración del Estado que afectan el patrimonio estatal, con miras a permitir el adecuado control social sobre las mismas, no afectando información comercial alguna.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Por lo pronto es preciso poner en relieve que esta clase de reclamaciones participan de los caracteres inherentes a los mecanismos de



control de legalidad de las decisiones adoptadas por un órgano público, el Consejo Para la Transparencia (CPLT) en este caso. Lo que se viene delineando busca aludir a la competencia y a las posibilidades de actuación de esta Corte, siendo atingente relevar en tal sentido que esta reclamación responde a la idea de un proceso cuyo norte es examinar y juzgar la legalidad del acto, o sea, definir que lo decidido se ajuste a la normativa que regula esta clase de asuntos;

Segundo: Ahora bien, si se atiende al texto y sentido de los artículos 21 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, puede concluirse que el diseño allí concebido implica que la reclamación –y con ello la competencia de esta Corte–, debe tener por objeto fundamental dirimir sobre la eventual concurrencia de alguna de las causales de reserva que impidan la entrega de la información o, al contrario, que hagan legalmente posible su entrega. Esa es la óptica primordial o prevalente con la que debe revisarse la legalidad o ilegalidad de la decisión del CPLT;

1.- En cuanto al carácter de la información

Tercero: Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, no puede descartarse la posibilidad de que el examen correlativo tenga que ver también con el presupuesto o condición esencial para que pueda haber lugar a una solicitud de “transparencia”, esto es, el carácter público (y de acceso público) de los antecedentes que estén siendo requeridos por alguna persona, máxime si ese tópico ha sido puesto en duda por quien demanda la protección de los derechos involucrados o que puedan verse eventualmente afectados con la entrega ordenada por el CPLT;

Cuarto: Acerca de esto último resulta atingente recordar que por medio de la resolución impugnada el CPLT ordenó a CORFO la entrega de copia de los borradores de contratos intercambiados entre dicha empresa y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM Potasio S.A. y SQM Salar S.A., con ocasión a las modificaciones a los contratos "Proyecto en el Salar de Atacama" y "Arrendamiento sobre pertenencias mineras OMA", de fechas 17 de enero de 2018 y 8 de enero de 2020;

Quinto: La tesis de las sociedades reclamantes (para lo sucesivo, SQM, simplemente) ha sido que no se trataría de antecedentes públicos, en los acotados términos que prescribirían tanto el artículo 8° inciso 2° como el artículo 5° inciso 1° de la LDT, conforme a los cuales sólo tendrían ese



carácter *“los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen...”*, cualidades de las que no participan los borradores de contrato;

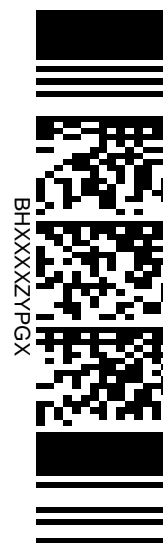
Sexto: A ese respecto viene al caso acentuar lo ya dicho acerca de la estirpe de esta reclamación, esto es, que corresponde a un instrumento de control de estricta legalidad. Desde esa perspectiva, al margen de que el recurrente lo asuma y consigne en su impugnación, no es ocioso enfatizar acá que el artículo 5° inciso segundo de la Ley de Transparencia se ha ocupado de señalar que también reviste la cualidad de pública *“toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”*. En tales condiciones, siendo un hecho indiscutido que los borradores de contrato están en poder de CORFO y que, en cuanto agencia estatal, CORFO es un órgano sujeto al deber de transparencia pasiva, quiere decir entonces que los borradores de contratos, antes aludidos, tienen el carácter de información pública al amparo de la regla contemplada en el citado inciso segundo del artículo 5° de la LDT.

Ahora bien, si la regla legal precitada importa conferir una expansión desmedida para aquello que pueda ser considerado como “información pública”, no es un asunto que tenga que ver con la legalidad que debe resolver esta Corte, sino que atañe a una hipotética objeción de constitucionalidad para cuya resolución el ordenamiento jurídico señala el órgano competente ante quien plantearlo;

II.- En cuanto a la causal de reserva

Séptimo: La propia Carta Fundamental, en su artículo 8°, prevé la posibilidad de que la ley establezca la reserva o secreto de la información, entre otras hipótesis, cuando la publicidad afectare *“los derechos de las personas”*. En esa misma línea de excepciones a la publicidad, el artículo 21 N° 2 de la LDT contempla como causal de secreto o de reserva, el hecho de que tal *“publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.”*;

Octavo: Acerca del carácter secreto de la información de que se trata, lo expresado en el motivo 6° de la sentencia pronunciada por el CPLT forma parte de aquello que no se ha cuestionado o que no se ha puesto en



entredicho por los interesados, esto es, en cuanto –refiriéndose a los borradores de contratos-, se asevera allí que resulta posible presumir *“el carácter de información secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información y haber sido objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto”*.

Pese a ello, seguidamente se añaden en ese fallo diversos órdenes de razones para desestimar la concurrencia de la causal de reserva antedicha, de las cuales cabe subrayar las que siguen:

a) que no se advierte cómo la divulgación de los borradores pueda ser capaz de afectar el desenvolvimiento competitivo o posición en el mercado de las empresas SQM;

b) que los borradores atañen a modificaciones contractuales de los años 2018 y 2020, suscritas finalmente por instrumento público, de modo que se trata de decisiones ya adoptadas. Por ende, la publicidad de las tratativas no puede afectar un proceso deliberativo ya afinado; y

c) que confluye un interés público prevalente de transparentar todo el iter decisonal de los acuerdos adoptados por la Administración del Estado, que afectan el patrimonio estatal, con miras a permitir el adecuado control social sobre las mismas;

Noveno: En ese contexto y bajo ese orden de consideraciones, siempre en el entendido que se trata de la mera publicidad y entrega de “borradores de contratos”, ha de coincidirse con CPLT en cuanto a que difícilmente pueda sostenerse que la comunicación dispuesta comporte algún compromiso para los derechos de carácter comercial o económico de las empresas SQM. Resulta difícil de sostener o es derechamente descartable que pueda serlo si se tiene en cuenta que esos borradores son el antecedente inmediato de las modificaciones contractuales posteriormente extendidas en escrituras públicas, que son instrumentos dados a la publicidad, por antonomasia;

Décimo: Ahora bien, las reclamantes subrayan que en los borradores de contratos, intercambiados en el proceso de negociación de los instrumentos denominados modificaciones a los contratos "Proyecto en el Salar de Atacama" y "Arrendamiento sobre pertenencias mineras OMA", de fechas 17 de enero de 2018 y 8 de enero de 2020, se contienen datos

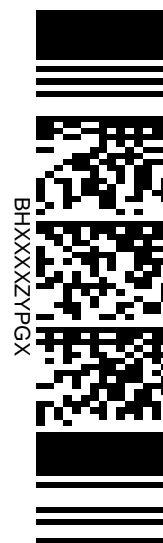


atingentes a sus procesos extractivos, el volumen de ventas de Litio y Potasio (entre 1997 y 2016), los precios de dichas operaciones, las producciones de Litio acumuladas para el período 1997-2016, los precios de venta e información sobre el pago de rentas anuales efectuadas por los arrendatarios. En suma, información confidencial y comercialmente sensible, relativa a sus precios, proyección económica, volúmenes de producción y ventas;

Undécimo: Naturalmente, información de esa índole tiene la potencialidad necesaria para lesionar los derechos de carácter comercial o económico de las empresas SQM, de momento que corresponden a costos de producción, volúmenes de venta y otros datos semejantes que son de particular relevancia para el posicionamiento de cualquier empresa en un mercado abierto o competitivo y que –de conocerse–, le dejarían en situación de desventaja frente a otras empresas del mismo rubro;

Duodécimo: Por consiguiente, tienen asidero las aprensiones de SQM y debe concederse que –en ese extremo–, se configura precisamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LDT. Empero, el ordenamiento jurídico franquea los instrumentos que permiten poner a buen recaudo esos derechos, inclusive permitiendo la publicidad de cierta información. Efectivamente, el artículo 11, letra d) de la LDT consagra el principio de máxima divulgación, estableciendo que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, *“excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales”*. Directamente imbricado con el referido principio se contempla también el de divisibilidad (Art. 11, letra e), conforme al cual *“si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.”*;

Décimo Tercero: En una evidente aplicación de tales principios el CPLT ha adoptado la medida de resguardo adecuada y pertinente disponiendo de modo expreso que deben excluirse de la entrega los *“comentarios o información comercial de las empresas Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM Potasio S.A. y SQM Salar S.A., tales como, producciones anuales de las Sociedades, venta y precios de dichas transacciones”*, es decir, la información sensible a la que aluden las



reclamantes porque en el fallo del CPLT se admite y reconoce que tienen ese carácter reservado que se reclama.

Se acierta en ello, porque lo expresado corresponde al necesario ejercicio de ponderación, en el sentido que tanto la reserva como la publicidad reconocen como límite los derechos de terceros;

Décimo Cuarto: Ahora bien, como es CORFO la que debe hacer entrega de los borradores de contrato, recae en ella velar también porque sea efectivamente excluida la información de naturaleza secreta, máxime si ha contraído obligaciones de confidencialidad y que, como quiera que sea, está en condiciones de calificarla por su indudable conocimiento directo del asunto.

Por estas razones, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducido por las sociedades S.Q.M. Salar S.A., S.Q.M. Potasio S.A., y Sociedad Química y Minera de Chile S.A., contra la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el 18 de enero de 2022, recaída en el amparo ingresado con el Rol N° C4529-2021.

Cada parte pagará sus costas.

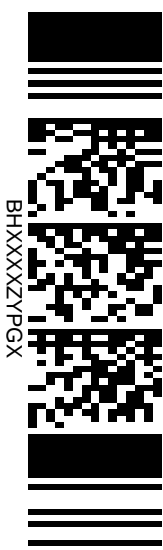
Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 60-2022 (Contencioso – Administrativo)

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y la Ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia. No firma la Ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

BHXXXXZYPGX



BHXXXXXZYPGX

Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y Ministra Suplente Paola Cecilia Diaz U. Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

